DECRETOS

Cofinanciación de programas de desarrollo rural con el Fondo DRI

DECRETO NUMERO 2621 DE 1994
(noviembre 29)

por el cual se reglamenta el artículo 71 de la Ley 101 de 1993.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Nacional y de conformidad con las recomendaciones del Compes señaladas en el documento 028-DNP: UDA -Fondo DRI-Minagricultura de octubre 12 de 1994,

DECRETA:

Artículo 1o. Podrán cofinanciar programas de desarrollo rural con el Fondo DRI las organizaciones campesinas y las comunidades de productores organizados, tales como, comunidades indígenas, cooperativas de primero y segundo grado, grupos precooperativos, empresas comunitarias, formas asociativas comunitarias, sociedades de productores agropecuarios, forestales o pesqueros (incluidas las de carácter mixto) y las asociaciones o federaciones de productores.

Parágrafo 1o. El Fondo DRI deberá velar porque los proyectos que cofinancie beneficien prioritaria y mayoritariamente a los pequeños y medianos productores rurales.

Parágrafo 2o. La cofinanciación para las comunidades indígenas se efectuará teniendo en cuenta la legislación y reglamentación especial expedida para resguardos y comunidades indígenas, sus usos y costumbres, y el Reglamento Operativo del DRI ajustado a las particularidades de estas comunidades.

Artículo 2o. Para acceder a la cofinanciación de programas o proyectos, las organizaciones campesinas e indígenas y las comunidades de productores organizados deberán

demostrar ante el Fondo DRI capacidad legal y estatutaria: identificar, formular y hacer la evaluación previa de los proyectos objeto de cofinanciación, siguiendo los parámetros establecidos en el Reglamento Operativo del Fondo DRI; y demostrar capacidad de cofinanciación respaldada por los estados financieros de los dos últimos años firmados por un revisor fiscal o contador.

Parágrafo 1o. En el caso de las comunidades indígenas, la capacidad legal y estatutaria se podrá demostrar con copia del Acta de Posesión del Cabildo o de la Autoridad Tradicional ante la alcaldía municipal, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia. Igualmente se demostrará la capacidad de cofinanciación con una carta de compromiso y una certificación de disponibilidad de los recursos, expedidas por la autoridad indígena correspondiente. Los proyectos deberán ser avalados por las autoridades indígenas del resguardo respectivo.

Parágrafo 2o. Los proyectos de que trata el presente artículo deberán contar con el aval del Consejo Municipal de Desarrollo Rural o la instancia que haga sus veces, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 101 de 1993. En los casos en que no se haya constituido esta instancia en el municipio, el Fondo DRI aceptará el aval de la comunidad beneficiaria y del alcalde, hasta el 30 de junio de 1995.

Parágrafo 3o. Cuando las entidades además de cofinancieras sean ejecutoras, deberán cumplir también con los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del Fondo DRI para tal fin.

Artículo 3o. Las Unidades Especializadas de los Departamentos y Distritos (Udecos) ejercerán las mismas funciones que tienen asignadas dentro del Sistema Nacional de Cofinanciación de que trata el Decreto 2132 de 1992. También, prestarán asesoría a las organizaciones y comunidades de que trata el presente decreto en la identificación y formulación de los proyectos.

Artículo 4o. Para todos los efectos, el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI, aplicará el criterio de libre concurrencia de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo DRI para cada subprograma y tipo de proyecto.

Artículo 5o. Para todos los procedimientos de la cofinanciación, se respetará la autonomía organizativa y gremial de las organizaciones con las cuales se celebren los convenios.

Artículo 6o. Hasta el 31 de diciembre de 1994, las organizaciones y comunidades de que trata el presente decreto, podrán presentar sus programas o proyectos directamente al Fondo DRI, cuando los respectivos departamentos no hayan creado y consolidado las Udecos y los Comités Departamentales de Cofinanciación.

Artículo 7o. Todos los programas o proyectos a ser cofinanciados por el Fondo DRI con las entidades reguladas en este decreto deberán estar vigilados por las veedurías populares o cualquier otra forma de control ciudadano, de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes sobre esta materia.

Artículo 8o. Los márgenes de cofinanciación de los proyectos de que trata el presente decreto serán los mismos establecidos por el Fondo DRI, en el Reglamento Operativo, de acuerdo con el Subprograma y la categoría del ente territorial donde se desarrollará el proyecto.

El acceso a la cofinanciación está supeditado, en todo caso, al cupo indicativo presupuestal asignado por la Junta Directiva del Fondo DRI al departamento dentro del cual habrá de ejecutarse el proyecto

Artículo 9o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 29 de noviembre de 1994.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Antonio Hernández Gamarra.

Sistema de Seguridad Social Integral. -Reglamentación-

DECRETO NUMERO 2633 DE 1994
(noviembre 29)

por el cual se reglamentan los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política,

DECRETA:

CAPITULO PRIMERO

Cobro por jurisdicción coactiva

Artículo 1o. **De las disposiciones aplicables.** El cobro de los créditos por jurisdicción coactiva se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en especial los artículos 561 a 568, las normas que lo modifiquen o adicionen y las disposiciones del presente decreto.

Artículo 2o. **Del procedimiento para constituir en mora al empleador.** Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Artículo 3o. **De la conformación de los grupos de cobro coactivo.** Para efectos del ejercicio de la jurisdicción coactiva conferida por el artículo 57 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector público podrán organizar, dentro de cada organismo, grupos de trabajo para el cobro por jurisdicción coactiva de los créditos a favor de los mismos, con funcionarios de cada una de dichas entidades, o ejercer tales funciones a través de la Oficina Jurídica del respectivo organismo o de la dependencia que haga sus veces.

Parágrafo. Cada Presidente o Director de organismo o entidad administradora del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector público o el funcionario que tenga dicha competencia podrá delegar, en los términos previstos por la ley, la facultad de otorgar poder en el Jefe de la Oficina Jurídica o dependencia que haga sus veces, o en el coordinador del grupo de trabajo, quien otorgará los poderes que considere necesarios para el cobro de los créditos por jurisdicción coactiva.

Artículo 4o. **De las funciones de los jefes de los grupos de cobro coactivo.** Los jefes de los grupos de cobro

coactivo de las respectivas entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector público ejercerán las siguientes funciones:

a) Recibir para su cobro las liquidaciones mediante las cuales las administradoras determinen los valores adeudados y no consignados dentro de los plazos e intereses señalados por el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, estudiando los mencionados documentos para las diligencias preliminares de cobro persuasivo con el fin de obtener el pago del respectivo crédito;

b) Dictar todos los actos y providencias tendientes a la ejecución para el cobro de dichos créditos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 561 y siguientes del Código de Procedimiento Civil;

c) Notificar los actos proferidos por el grupo de trabajo respectivo en desarrollo de la labor de cobro coactivo;

d) Elaborar los acuerdos de pago con los deudores, ejecutados o no, cuando hubiere lugar a ello, con sujeción a la reglamentación que para el efecto debe expedirse;

e) Aprobar las cauciones decretadas;

f) Designar curadores cuando se requiera;

g) Tomar las medidas cautelares pertinentes;

h) Resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos proferidos, conceder los recursos de apelación y el trámite de las excepciones propuestas, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o el Consejo de Estado, según la cuantía determinada;

i) Ordenar la suspensión del proceso de cobro coactivo cuando hubiere lugar a ello;

j) Liquidar las costas y el valor de los créditos;

k) Compilar para empleo del respectivo grupo las normas que reglamenten el cobro coactivo y mantenerlas actualizadas;

l) Seleccionar los abogados que por razón de la cuantía o clase del proceso adelantarán el correspondiente cobro coactivo;

m) Realizar el reparto correspondiente a los abogados que conformen el grupo;

n) Organizar los libros diario, radicator y de valores en custodia;

ñ) Informar a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, el estado de cada uno de los procesos indicando por lo menos los siguientes aspectos: nombre del deudor, empleador; valor de la deuda a la fecha, incluida la sanción moratoria; etapa del proceso; fecha de prescripción del crédito y posibilidades de pago;

o) Fijar los criterios administrativos internos para el cobro coactivo;

p) Las demás que sean necesarias y propias para el desarrollo del cobro coactivo.

CAPITULO SEGUNDO

Cobro por jurisdicción ordinaria

Artículo 5o. **Del cobro por vía ordinaria.** En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.

Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

CAPITULO TERCERO

Control y vigilancia

Artículo 6o. **De las funciones de la Superintendencia Bancaria respecto de las administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida.** Conforme a lo dispuesto en el Decreto 1284 de 1994 la Superintendencia Bancaria vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto y ejercerá las siguientes funciones con relación a las sociedades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector público:

a) Vigilar el estricto cumplimiento de la obligación por parte de las entidades administradoras mencionadas de reportar con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, la relación de empleadores morosos de la consignación oportuna de los aportes así como de la estimación de sus cuantías e interés moratorio en los términos del artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes;

b) Requerir a dichas entidades por el oportuno cumplimiento del reporte mencionado con ocasión del incumplimiento de las obligaciones de los empleadores;

c) Practicar visitas de inspección a dichas entidades con el fin de obtener un conocimiento integral de libros y demás documentos que se requieran para comprobar la pertinencia del proceso de cobro.

Artículo 7o. De las funciones de la Superintendencia Bancaria respecto de las administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 1284 de 1994 la Superintendencia Bancaria, vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto y ejercerá las siguientes funciones con relación a las obligaciones de las sociedades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad.

a) Controlar y vigilar el estricto cumplimiento de la obligación por parte de las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y las entidades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad de reportar con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, los nombres de empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como de la estimación de sus cuantías e interés moratorio con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes;

b) Exigir a dichas entidades informar con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, sobre el estado de cada uno de los procesos en la jurisdicción ordinaria indicando por lo menos los siguientes aspectos: nombre del empleador moroso; valor de la deuda a la fecha, incluida la sanción moratoria; etapa del proceso; fecha de prescripción del crédito y posibilidades de pago;

c) Practicar visitas de inspección a dichas entidades con el fin de obtener un conocimiento integral de libros y demás

documentos que se requieran para comprobar la efectividad de cada proceso.

Artículo 8o. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 29 de noviembre de 1994.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Guillermo Perry Rubio.

Régimen de pensión de jubilación por aportes

DECRETO NUMERO 2709 DE 1994
(diciembre 13)

por el cual se reglamenta el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus facultades constitucionales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:

Artículo 1o. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2o. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez

o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.

Artículo 3o. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.

Artículo 4o. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.

Artículo 5o. Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.

Artículo 6o. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 7o. Certificaciones y tramitación. La entidad empleadora al retiro del empleado, o cuando éste lo solicite, certificará por escrito el tiempo trabajado, la entidad de previsión a la cual fueron hechos los aportes y el valor pagado por cada uno de los factores salariales durante el último año de servicios. Si el período de trabajo fuere inferior a un año deberá certificar lo pagado por los citados conceptos, durante dicho período.

La dependencia de personal de la última entidad empleadora tendrá la obligación de recibir, revisar y con la colaboración del interesado, completar los documentos pertinentes para demostrar el derecho a la pensión de jubilación por aportes.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75% del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.

Artículo 9o. Derechos de los beneficiarios de la pensión de jubilación por aportes. Los beneficiarios de la pensión de jubilación por aportes tienen las mismas obligaciones y derechos accesorios establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias que rijan en la entidad de previsión pagadora.

Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.

Parágrafo. Si la entidad de previsión obligada al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes es la Caja Nacional de Previsión Social, el pago de dicha prestación lo asumirá el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional a partir de 1995.

Si las entidades de previsión obligadas al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes son del orden territorial, dicha prestación, en el evento de liquidación de las mismas, estará a cargo de la entidad que las sustituya en el pago.

Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente.

Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.

La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación.

Artículo 12. **Vigencia.** El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los artículos 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 y 29 del Decreto 1160 de 1989.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 13 de diciembre de 1994.

ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
María Sol Navia Velasco.

Asociaciones agropecuarias y campesinas. Marco jurídico

DECRETO NUMERO 2716 DE 1994
(diciembre 14)

por el cual se reglamenta el parágrafo 1o. del artículo 30 del Decreto 1279 de 1944.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades constitucionales, y en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. **Del campo de aplicación.** El presente decreto regula el marco jurídico de las asociaciones agropecuarias y campesinas, nacionales y no nacionales, constituidas o que se constituyan en el territorio nacional, con el fin de permitir su adecuado control y vigilancia para asegurar que sus actos, en cuanto a su constitución, actuación administrativa, desarrollo del objeto social, disolución y liquidación se cumplan, en un todo, conforme a la ley, a este decreto y a los respectivos estatutos.

Artículo 2o. **De la naturaleza.** Para los fines del presente decreto se entiende por asociación agropecuaria la persona jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro, constituida por quienes adelantan una misma actividad agrícola,

pecuaria, forestal y piscícola y acuícola con el objeto de satisfacer o defender los intereses comunes de sus asociados y contribuir al desarrollo del sector rural nacional.

Se entiende por Asociación Campesina aquella organización de carácter privado constituida o que se constituya por campesinos, y que tenga como objeto principal la interlocución con el Gobierno en materia de reforma agraria, crédito, mercadeo y asistencia técnica agropecuaria.

Parágrafo. Entidad "sin ánimo de lucro" a que se refiere el presente artículo, es aquella en la que las utilidades que se obtienen en el desarrollo de su objeto social no son objeto de distribución entre sus asociados.

Los recursos que los asociados entreguen a las asociaciones no se consideran aportes de capital, sino contribuciones para sostenimiento de la persona jurídica y/o para la prestación de servicios a sus asociados, y en ningún caso son reembolsables ni transferibles.

El contenido de este parágrafo se hará constar en los estatutos de toda asociación agropecuaria o campesina, que se organice o constituya con fundamento en el presente decreto, de manera que el patrimonio de estas entidades no puede ser, por ningún motivo, objeto de distribución entre sus asociados.

Artículo 3o. **De las características.** Toda asociación agropecuaria o campesina deberá reunir las siguientes características:

1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios.
2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado.
3. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados.
4. Que su patrimonio sea variable e ilimitado.

Artículo 4o. **De las condiciones.** Para que una Asociación Agropecuaria o Campesina, sea considerada de carácter nacional, su objeto social debe ser susceptible de desarrollar en todo el territorio nacional. Cuando se desarrolle en parte de éste, será de carácter no nacional.

Artículo 5o. **De la denominación.** Las asociaciones agropecuarias o campesinas incluirán en su denominación social las palabras "Asociación o Corporación Agropecuaria o Campesina Nacional o no Nacional", según el caso.

CAPITULO II

De la constitución y reconocimiento de las asociaciones agropecuarias o campesinas

Artículo 6o. De la constitución. Las asociaciones agropecuarias o campesinas se constituirán con un mínimo de veinte (20) miembros en acto privado que se hará constar en acta firmada por todos los asociados fundadores con anotación de sus nombres, documentos de identificación o estatuto del que derivan su existencia y domicilios, en la cual se consagrará:

1. La aprobación del cuerpo estatutario que regirá la asociación agropecuaria o campesina y el sometimiento a los mismos.
2. El valor de las cuotas iniciales de sostenimiento aportadas por los miembros fundadores.
3. El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.
4. El nombramiento del Revisor Fiscal.
5. El nombramiento del representante legal.

Artículo 7o. Del reconocimiento jurídico. Corresponde al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones agropecuarias nacionales o campesinas nacionales y de las modificaciones que se presenten a sus estatutos. El reconocimiento jurídico de las asociaciones agropecuarias o campesinas no nacionales corresponde a la Secretaría de Gobierno de las Alcaldías de los Municipios, Distritos Especiales, y Distrito Capital o a las que hagan sus veces. La Secretaría competente para estos efectos será la correspondiente al lugar del domicilio principal que se establezca en los estatutos de tales asociaciones.

Artículo 8o. De los requisitos. Para el reconocimiento de personería jurídica se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica suscrita por el representante legal de la Asociación.
2. Acta de la asamblea general de constitución.
3. Relación de afiliados, indicando si se trata de persona natural o jurídica; en este último caso anexar certificado de existencia y representación legal expedida por autoridad competente, como también la autorización del órgano directivo para ingresar a la misma.

4. Texto completo de los estatutos, con firmas del presidente y secretario intervinientes en la asamblea general de constitución.

Artículo 9o. Del trámite para el reconocimiento. Recibida la solicitud y sus anexos, la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para las asociaciones de carácter nacional, o la Secretaría de Gobierno respectiva para las de carácter no nacional, asumirá su estudio y si su objeto social está acorde con lo señalado en el artículo 2o. de este decreto y no fuere contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres, procederá a elaborar la resolución concediendo la personería jurídica; en caso contrario, será rechazado de plano dicho reconocimiento.

Parágrafo. Cuando la documentación presente deficiencias o esté incompleta, será devuelta al interesado con las indicaciones del caso, a fin de que se subsanen las deficiencias encontradas o se aporten los documentos faltantes. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones, no se da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido el expediente se archivará, sin perjuicio de que el interesado presente una nueva solicitud.

Artículo 10. De la existencia y representación legal. Para todos los efectos legales será prueba de la existencia y representación legal de una asociación agropecuaria o campesina, la certificación que en tal sentido expida la Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso.

Artículo 11. De los estatutos. Los estatutos de toda asociación agropecuaria o campesina deberán contener:

1. Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones.
2. Objeto social de la asociación y enumeración de sus actividades.
3. Condiciones para la admisión de socios, retiro y exclusión y determinación del órgano competente para su decisión.
4. Derechos y deberes de los asociados.
5. Régimen de sanciones, causales y procedimientos consagrando la oportunidad para que el asociado ejerza cabalmente el derecho a su defensa.
6. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de los órganos de dirección, adminis-

tración y vigilancia, condiciones, incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros.

7. Convocatoria a asambleas ordinarias y extraordinarias.

8. Representación legal, funciones y responsabilidades.

9. Constitución e incremento patrimonial de la asociación.

10. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación.

11. Procedimiento para reforma de estatutos y expedición de reglamentos internos.

12. Disposiciones sobre destinación del remanente de los bienes de la Asociación, una vez disuelta y liquidada a una entidad de beneficio común o sin ánimo de lucro.

13. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de los objetivos.

Parágrafo. Los estatutos serán reglamentados por la Junta Directiva, con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en la prestación de servicios.

Artículo 12. De las reformas estatutarias. Las reformas de estatutos de las asociaciones agropecuarias o campesinas nacionales y no nacionales deberán ser aprobadas en Asamblea General y no producirán efectos mientras no hayan sido aprobadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, mediante resolución motivada, para lo cual se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud suscrita por el representante legal o por el Presidente de la reunión estatutaria en la cual hayan sido aprobadas las reformas.

2. Actas según estatutos, en las que conste la aprobación de las respectivas reformas con firmas del presidente y secretario de la respectiva reunión.

3. Estatutos que incluyan todas las modificaciones introducidas con firmas del presidente y secretario de la reunión en que se aprobaron las reformas.

CAPITULO III

De los asociados

Artículo 13. De los asociados. Pueden ser miembros de una asociación agropecuaria, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la producción agrícola, pecua-

ria, forestal, piscícola, y acuícola. No pueden serlo en consecuencia, aquellas personas cuyas actividades se limitan a servir de simples intermediarios entre los productores y los consumidores, ni quienes tienen por actividad exclusiva suministrar bienes o prestar determinados servicios a los productores. En las asociaciones campesinas podrán ser miembros las personas que acrediten la calidad de campesinos, de conformidad con lo establecido en los respectivos estatutos.

Artículo 14. Del término para adquirir la calidad de asociado. La calidad de asociado de una asociación agropecuaria o campesina se adquiere:

1. Para los fundadores, a partir de la fecha de la Asamblea de constitución, y

2. Para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha que sean aceptados por el órgano competente.

Artículo 15. De los deberes. Son deberes fundamentales de los asociados:

1. Cumplir con los estatutos y reglamentos de la asociación.

2. Acatar las decisiones de la asamblea general y de la Junta Directiva.

3. Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias.

4. Desempeñar honesta y responsablemente las funciones inherentes a los cargos para los cuales sean elegidos por la asamblea general o por la junta directiva.

5. Dar a los bienes de la asociación el uso para el cual están destinados y cuidar de su conservación y mantenimiento.

6. Velar por los intereses de la asociación.

7. Pagar cumplidamente las cuotas de sostenimiento y demás obligaciones que tengan para con la asociación.

8. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio social de la asociación agropecuaria o campesina.

Artículo 16. De los derechos. Son derechos fundamentales de los asociados:

1. Utilizar los servicios de la asociación y realizar con ella las operaciones propias de su objeto social.

2. Participar en las actividades de la asociación y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales.

3. Ser informados de la gestión de la asociación de acuerdo con las prescripciones estatutarias y/o reglamentarias.

4. Fiscalizar la gestión de la asociación.

5. Retirarse voluntariamente de la asociación, y

6. Participar en las asambleas generales con voz y voto de conformidad con lo establecido en los respectivos estatutos.

Parágrafo. El ejercicio de los derechos de que trata este artículo está condicionado al cumplimiento de los deberes.

Artículo 17. De la pérdida de la calidad de asociado. La calidad de asociado se perderá por muerte, disolución cuando se trate de personas jurídicas, retiros voluntarios, forzosos o por exclusión.

En los estatutos se determinará el órgano competente para decretar la exclusión de un asociado, consagrándose, en todo caso, la oportunidad para que el excluido ejerza cabalmente el derecho a su defensa.

El retiro forzoso está sujeto a la incapacidad civil para ejercer derechos y contraer obligaciones, de conformidad con las leyes vigentes sobre la materia.

En caso de muerte, la junta directiva decidirá si los herederos del asociado fallecido, continúan asociados, y en caso afirmativo éstos tendrán los mismos derechos y obligaciones de los demás asociados.

CAPITULO IV

Del patrimonio

Artículo 18. De la composición. El patrimonio de las asociaciones agropecuarias o campesinas, estará integrado, entre otros, por los siguientes recursos:

1. Cuotas de afiliación y sostenimiento que determine la asamblea general.

2. Aportes o donaciones que les otorguen personas naturales o jurídicas de carácter privado.

3. Beneficios o pagos que obtengan por la prestación de sus servicios.

4. Bienes o rendimientos derivados de cualesquiera otras actividades que desarrollen dentro del marco de su objeto social.

Parágrafo. El patrimonio de las asociaciones agropecuarias o campesinas es independiente del de cada uno de sus asociados. En consecuencia, las obligaciones de una asociación no dan derecho al acreedor para reclamarlas a ninguno de sus afiliados, a menos que éstos hayan consentido expresamente en responder por todo o por parte de tales obligaciones.

CAPITULO V

De la Dirección, Administración y Vigilancia Interna

Artículo 19. De los órganos que la componen. La asamblea general es el órgano de dirección, la Junta Directiva y el Representante Legal son de administración y Revisoría Fiscal o el Fiscal de Vigilancia Interna.

Artículo 20. De la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano máximo de dirección de las asociaciones agropecuarias o campesinas y está constituida por la reunión de asociados hábiles o delegados elegidos por éstos, sus decisiones son obligatorias para todos los asociados siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias.

Parágrafo. Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de acuerdo con los estatutos o reglamentos.

Artículo 21. De las reuniones. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares, excepción hecha de las asociaciones de segundo grado y tercer grado que las celebrarán dentro de los primeros cuatro (4) meses.

Las extraordinarias podrán celebrarse en cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente asamblea ordinaria.

Las asambleas generales extraordinarias sólo podrán tratar los asuntos para los cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de éstos.

Parágrafo 1. Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias serán convocadas por la Junta Directiva, o en su defecto, podrán ser convocadas por el Fiscal o Revisor Fiscal o por un número plural de asociados que represente por lo menos el treinta por ciento (30%) de los afiliados.

La convocatoria para las asambleas debe hacerse con una anticipación no inferior a veinte (20) días calendario, la cual se hará conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos, en la forma prevista en los estatutos. En esta convocatoria se indicará la fecha, hora, lugar de la reunión y temas a tratar.

Para este efecto el Revisor Fiscal o Fiscal deberá elaborar el listado de los socios que válidamente pueden participar con voz y voto en la asamblea, la cual se dará a conocer a los mismos, con veinte (20) días de anticipación a la fecha prevista para su realización.

Parágrafo 2. Cuando se trate de asambleas ordinarias que no puedan celebrarse en el término estipulado en este artículo la asociación nacional deberá solicitar autorización previa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las no nacionales a la Secretaría de Gobierno respectiva, para celebrar el evento, la cual se concederá si los argumentos que exponen los interesados están relacionados con perturbaciones del orden público o por inconveniencias de índole económico.

La asistencia de la mitad más uno de los asociados hábiles o delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas, si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior a la tercera parte de los mismos. Si en esta segunda oportunidad tampoco se alcanzare el quórum requerido se convocará a una nueva asamblea dentro de los treinta días siguientes, en la cual habrá quórum con el número de socios que represente al menos el 15% de los socios activos.

Por regla general las decisiones de la asamblea general se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes, salvo que los estatutos establezcan un porcentaje superior.

La elección de la Junta Directiva y demás cuerpos plurales se hará mediante los procedimientos y sistemas que establezcan los estatutos o reglamentos de cada asociación. Cuando se adopte el sistema de listas o planchas, se aplicará el sistema de cuociente electoral.

En las Asambleas generales de socios corresponderá a cada uno de ellos un solo voto, sin embargo podrá representar hasta dos (2) asociados más, si presenta los poderes válidamente otorgados. Las personas jurídicas asociadas participarán en las asambleas por intermedio de su representante legal o de la persona que éste designe.

Parágrafo 3o. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado o la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, convocará la asamblea general a sesiones extraordinarias cuando se hubieren cometido irregularidades que sólo pueden ser conocidas o resueltas por la asamblea, o que pudiendo ser subsanadas por la Junta Directiva, ello no se hubiere producido dentro de los quince (15) días siguientes, contados a partir de la solicitud del Ministerio o la Secretaría de Gobierno en tal sentido.

Artículo 22. **De las funciones de la Asamblea General.** La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones:

1. Establecer las políticas y directrices generales de la asociación para el cumplimiento de su objeto social.
2. Aprobar y reformar los estatutos.
3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia.
4. Aprobar o improbar los estados financieros.
5. Adoptar las medidas que exijan el interés común de los asociados, el cumplimiento de la ley, los estatutos o reglamentos de la asociación.
6. Elegir los miembros de la Junta Directiva.
7. Elegir al Fiscal o Revisor Fiscal y si es el caso fijarle la remuneración.
8. Confirmar, modificar o revocar las sanciones, de acuerdo con el reglamento que para este efecto expida la Junta Directiva.
9. Las demás que señalen la ley, los estatutos o las que por su naturaleza le correspondan como órgano supremo de dirección de la asociación.

Artículo 23. **De las Asambleas de Delegados.** Los estatutos podrán establecer que la Asamblea General de asociados sea sustituida por la Asamblea General de Delegados en los siguientes casos:

1. Cuando la realización de la Asamblea General de socios, se dificulte en razón del número de asociados que determinen los estatutos.
2. Cuando su realización resultare desproporcionadamente onerosa en consideración a los recursos de la asociación.

Parágrafo. El número mínimo de delegados será de treinta (30) y se elegirán para el período y número previsto en los

estatutos. La Junta Directiva reglamentará el procedimiento de elección, que en todo caso deberá garantizar la adecuada información y participación de los asociados.

A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas relativas a la Asamblea General de asociados.

Artículo 24. De la Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano de administración permanente de la asociación, sujeta a las directrices y políticas de la Asamblea General y responsable de la administración general de los negocios y operaciones.

El número de sus integrantes, su período, las causales de remoción y sus funciones serán fijados en los estatutos. Las funciones de la Junta Directiva serán las necesarias para la realización del objeto social. Se consideran atribuciones implícitas las no asignadas expresamente a otros órganos por la ley, los estatutos o reglamentos.

Parágrafo. Cuando una persona natural actúe en representación de una persona jurídica asociada y sea elegida como miembro de la Junta Directiva, cumplirá sus funciones en interés de la asociación, en ningún caso en el de la entidad que representa.

Artículo 25. Del representante legal. El Gerente, Director Ejecutivo o el Presidente de la Junta Directiva, según se determine en los estatutos, será el representante legal de la asociación y ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Será nombrado por ésta y sus funciones y período serán precisados en los estatutos.

Artículo 26. De la vigilancia interna. La fiscalía o revisoría fiscal es el órgano de supervisión y control interno de la asociación, y estará a cargo de un Fiscal o Revisor Fiscal con su respectivo suplente, elegidos por la Asamblea General para el período que se establezca en los estatutos, el cual deberá coincidir con el fijado para la Junta Directiva.

Artículo 27. De las funciones del Revisor Fiscal o Fiscal. El Fiscal o Revisor Fiscal tendrá las siguientes funciones:

1. Asegurar que las operaciones de la asociación se ejecuten de conformidad con las decisiones de la Asamblea General, la Junta Directiva, la ley, los estatutos y los reglamentos.
2. Verificar que los actos de los órganos de Dirección y Administración se ajusten a las prescripciones legales, a los estatutos y a los reglamentos.

3. Exigir que se lleve regularmente la contabilidad, las actas y los registros de los asociados.

4. Inspeccionar los bienes de la asociación y exigir que se tomen oportunamente las medidas que tiendan a su conservación y seguridad.

5. Autorizar con su firma los inventarios y balances, cuando se trate del Revisor Fiscal.

6. Convocar a la Asamblea General extraordinaria en los casos previstos en la ley, los estatutos o reglamentos y velar por el cumplimiento estricto de las normas y procedimientos de convocatoria, quórum y habilidades en las reuniones de asamblea general.

7. Colaborar con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la Secretaría de Gobierno respectivo, según el caso, en el control y vigilancia de la asociación, para lo cual rendirá los informes que le sean solicitados.

8. Efectuar arquezos de caja cuando lo juzgue necesario, y por lo menos una vez cada trimestre.

9. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la junta directiva o al representante legal, según el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la asociación.

10. Las demás que le señalen la ley, los estatutos y los reglamentos.

Parágrafo. El fiscal o revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la asociación, a sus afiliados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 28. Calidades del Revisor Fiscal o Fiscal. El cargo de revisor fiscal debe ser desempeñado por un contador público, cuya inscripción no se encuentre suspendida o cancelada ni se encuentre incurso dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Ley 43 de 1990.

El cargo de Fiscal debe ser desempeñado por una persona que no sea miembro de la asociación y con conocimiento de contabilidad.

CAPITULO VI

De la inscripción de los órganos de administración y vigilancia interna

Artículo 29. Requisitos. La Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las Secretarías de

Gobierno respectiva, según el caso, realizarán las inscripciones de representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales o fiscales de las Asociaciones Agropecuarias y Campesinas, para lo cual los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de registro suscrita por el representante legal o secretario, o por quienes estén autorizados para tal fin.
2. Actas o extracto de las partes pertinentes de las mismas, en donde conste: el número total de miembros de la asociación y el de los asistentes a la respectiva reunión, las elecciones y designaciones efectuadas según el procedimiento y los requisitos estatutarios, las cuales se aportarán con las firmas de presidente y secretario.

Parágrafo 1. La inscripción de miembros de junta directiva, revisores fiscales o fiscales y representantes legales de las asociaciones agropecuarias y campesinas constituye un registro efectuado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o las Secretarías de Gobierno, según el caso, respecto de las decisiones adoptadas por la Asamblea General o la junta directiva. Con base en el mismo se expedirán los certificados a que hubiere lugar.

Parágrafo 2. Si se presentaren dos o más peticiones de inscripción de diferentes órganos de administración y/o vigilancia para un mismo período, los documentos o solicitudes que planteen estas divergencias o controversias sobre la legalidad de las reuniones o de las decisiones de la Asamblea General y/o junta directiva de las entidades de que trata este decreto, serán devueltos a los interesados para que éstos diriman sus controversias ante la justicia ordinaria mediante el procedimiento establecido en el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil.

CAPITULO VII

Control y vigilancia

Artículo 30. **De los órganos de control y vigilancia.** El control y vigilancia de las asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de asegurar que sus actos, en cuanto a su constitución, actuación administrativa, desarrollo del objeto social, disolución y liquidación se cumplan en un todo conforme a la ley, a este decreto, a los respectivos estatutos y a los reglamentos.

Corresponde, con estos mismos fines, a las Secretarías de Gobierno de las alcaldías de los municipios, Distritos Especiales y Distrito Capital o a las que hagan sus veces, el control y vigilancia de las asociaciones agropecuarias y campesinas no nacionales.

Artículo 31. **De las atribuciones.** Para el control y vigilancia sobre las asociaciones agropecuarias o campesinas se ejercerán las siguientes funciones:

1. Adelantar investigaciones en virtud de las cuales se podrán realizar inspecciones a los libros y documentos y requerir las informaciones que estime pertinentes.
2. Asistir a las asambleas generales mediante un delegado cuando lo considere necesario.
3. Convocar a asambleas extraordinarias en los casos previstos en el parágrafo tercero del artículo 21 de este decreto.
4. Imponer las sanciones cuando se incurra en violaciones legales, estatutarias o reglamentarias o se incumplan sus decisiones.

Parágrafo 1. Las asociaciones agropecuarias y campesinas están obligadas a prestar a la entidad que ejerza su control y vigilancia toda la colaboración y suministrarle la información que ésta requiera para el cumplimiento de las funciones de control y vigilancia de que trata el presente capítulo.

Estas asociaciones también están obligadas a remitir a la Entidad que ejerce su control y vigilancia, entre otros documentos, copia auténtica de los balances y estado de pérdidas y ganancias de cada ejercicio con arreglo a las normas vigentes sobre la materia y las actas de la asamblea general, de las reformas de estatutos, de los cambios de miembros de órganos directivos y de fiscalización y de representante legal, lo mismo que informar sobre el retiro o ingreso de nuevos asociados.

Parágrafo 2. Las asociaciones agropecuarias y campesinas igualmente deberán abrir por lo menos los siguientes libros: de afiliados, de actas de asamblea general y junta directiva y de inventarios y balances. Todos estos libros deben ser previamente registrados ante la Entidad que ejerce el control y vigilancia, y está prohibido que en éstos se arranquen, sustituyan o adicioneen hojas o se hagan enmendaduras, tachaduras o raspaduras.

CAPITULO VIII

Del régimen de sanciones

Artículo 32. **De las prohibiciones de las asociaciones.** A ninguna asociación agropecuaria o campesina le será permitido:

1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.
2. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores.
3. Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos.
4. Consagrar como objetivo social principal el desarrollo de actividades comerciales, ni desviar en tal sentido su objeto social principal.

Artículo 33. De la escala sanciones para las asociaciones. Cuando se compruebe que una asociación agropecuaria o campesina, excede los límites impuestos en la ley, los estatutos y reglamentos, será sancionada por la Entidad que ejerce su control y vigilancia, mediante resolución motivada, salvo para la establecida en el numeral 1o., para este efecto y de acuerdo con la gravedad de la infracción, se adopta la siguiente escala de sanciones:

1. Amonestación escrita por una sola vez.
2. Conminación para que suspendan los actos o actividades contrarios a la ley, los estatutos o los reglamentos, bajo apremio de multas diarias sucesivas de uno (1) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.
3. Prohibición temporal o definitiva para el ejercicio de una o más actividades específicas de su objeto social.
4. Suspensión de la personería jurídica hasta por el término de seis (6) meses.
5. Orden de disolución y liquidación de la asociación con la correspondiente cancelación de la personería jurídica.

Parágrafo 1. Las sanciones podrán ser revocadas de oficio o a petición de parte, mediante resolución motivada, cuando se establezca plenamente que se han subsanado las irregularidades que las motivaron, con excepción de aquellas que se hubieren impuesto por violación de la ley.

Parágrafo 2. Mientras una asociación agropecuaria o campesina tenga suspendida la personería jurídica, los miembros de la junta directiva y el representante legal no podrán celebrar ni ejecutar operaciones en nombre de ella, salvo las que sean necesarias para la conservación del patrimonio social. En consecuencia, la contravención a la presente norma los hará solidariamente responsables de los perjuicios que se ocasionen a la asociación y/o a terceros.

Artículo 34. De las prohibiciones de los asociados. A los asociados les está prohibido:

1. Utilizar el nombre de la asociación para adelantar campañas políticas, religiosas o de cualquier otra índole ajenas al objeto social de la misma.
2. Presionar a los miembros directivos de la asociación con el fin de que se desvíe el objeto social de la entidad o se violen sus estatutos.
3. Desarrollar actividades que tiendan a perjudicar a la asociación, a sus directivos o a sus asociados.
4. Servirse de la asociación en provecho de terceros.

Parágrafo. En los estatutos de las asociaciones agropecuarias o campesinas deberá establecerse la escala de sanciones para los asociados, de acuerdo con la gravedad de la infracción.

Artículo 35. De la responsabilidad de miembros de los órganos de administración y vigilancia interna. Los miembros de la junta directiva, el representante legal, el liquidador y el revisor fiscal o fiscal, serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias y se harán acreedores a las sanciones indicadas en el artículo 36 de este decreto, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.

Los miembros de la junta directiva serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión en donde se tomó la decisión que dio origen a la imposición de la sanción o de haber salvado expresamente su voto.

Artículo 36. De las sanciones a los miembros de los órganos de administración y vigilancia interna. Las sanciones aplicables por los hechos contemplados en el artículo anterior, serán las siguientes:

1. Amonestación escrita por una sola vez.
2. Multa hasta de cien (100) veces el salario mínimo mensual legal vigente.
3. Decretar la separación del respectivo cargo.

Artículo 37. De la aplicación de sanciones. Las sanciones establecidas en los artículos 33 y 36 de este decreto, con excepción de la enunciada en el numeral 1o. de ambas disposiciones, serán impuestas mediante resolución motivada en la que se indicarán los recursos a que tienen derecho

los sancionados. En todos los casos será necesaria una investigación previa.

CAPITULO IX

De la fusión, incorporación, disolución y liquidación

Artículo 38. De la condición para la fusión o incorporación. Las asociaciones agropecuarias o campesinas podrán fusionarse o incorporarse cuando su objeto social sea común o complementario.

Artículo 39. De la fusión. Cuando dos o más asociaciones se fusionen, se disolverán sin liquidarse y constituirán una nueva asociación, con denominación diferente, que se hará cargo del patrimonio de las asociaciones disueltas.

La fusión requerirá la aprobación de las asambleas generales de las asociaciones que se fusionan.

Artículo 40. De la incorporación. En caso de incorporación, la asociación o asociaciones incorporadas se disuelven sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la incorporante.

Para la incorporación se requerirá la aprobación de las asambleas generales de la asociación o asociaciones incorporadas. La asociación incorporante aceptará la incorporación por decisión de la Asamblea General o de la junta directiva, según lo dispongan los estatutos.

Artículo 41. De la subrogación de derechos y obligaciones. En caso de incorporación la asociación incorporante, y en el de fusión, la nueva asociación, se subrogará en todos los derechos y obligaciones de las asociaciones incorporadas o fusionadas.

Artículo 42. De la aprobación. La fusión y la incorporación requerirá de la aprobación de la entidad que ejerce el control y vigilancia, para lo cual las asociaciones fusionadas o incorporadas deberán presentar todos los antecedentes y documentos referentes a estos procedimientos.

Artículo 43. De la disolución. Las asociaciones agropecuarias o campesinas deberán disolverse por una cualquiera de las siguientes causas:

1. Por acuerdo voluntario de los asociados.
2. Por reducción de los asociados a menos del número exigible para su constitución.
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para la cual fue creada.

4. Por fusión o incorporación a otra asociación.

5. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrollan sean contrarias a la ley o las buenas costumbres.

6. Por vencimiento del término previsto para su duración, salvo que en los estatutos se haya establecido un término indefinido.

Parágrafo 1. En los casos previstos en los numerales 2o. y 3o. del presente artículo, la entidad que ejerce el control y vigilancia, dará a la asociación un plazo no superior a seis (6) meses contados a partir del momento en que este organismo conozca esta situación, para que subsane la causal, o para que en el mismo término convoque asamblea general, con el fin de acordar la disolución. Si transcurrido dicho término, la asociación no demuestra haber subsanado la causal o no hubiere reunido a la asamblea, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, decretará mediante resolución motivada la disolución y nombrará liquidador o liquidadores.

Parágrafo 2. Cuando la disolución haya sido acordada por la Asamblea General, ésta designará el liquidador o liquidadores de acuerdo con sus estatutos, o en su defecto lo será el último representante legal inscrito, quienes deberán enviar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o a la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, los siguientes documentos, para efectos de su aprobación:

1. Acta de disolución de la entidad, en la cual conste el nombramiento del liquidador, balance general y estudio de cuentas, con las firmas del representante legal y del fiscal o revisor fiscal, o de quienes legalmente hagan sus veces.
2. Documento en que conste el trabajo de liquidación, con la firma del liquidador. Este documento deberá ser aprobado por el órgano al que estatutariamente corresponda acordar la disolución, según acta, con los mismos requisitos de firmas de su presidente y de su secretario, y
3. Certificación expedida por la entidad de beneficio común o sin ánimo de lucro que reciba el remanente de los bienes provenientes de la liquidación, en donde conste la cuantía de la donación.

Artículo 44. De la aprobación de la disolución. La disolución de las asociaciones agropecuarias o campesinas, cualquiera que sea el origen de la decisión, será aprobada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso.

Artículo 45. De las consecuencias de la disolución. Disuelta la asociación, se procederá a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. En tal caso deberá adicionar su razón social con la expresión "en liquidación".

Artículo 46. De la actuación de los liquidadores. Los liquidadores actuarán de consuno y las discrepancias que se presenten entre ellos serán resueltas por los asociados o en su defecto por la entidad que ejerce el control y vigilancia. El liquidador o liquidadores tendrán la representación legal de la asociación.

Parágrafo. Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario, para conocer el estado de la liquidación y dirimir las discrepancias que se presenten entre los liquidadores.

Artículo 47. De la publicidad de la liquidación. Con cargo al patrimonio de la entidad liquidada, el liquidador publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus derechos.

Artículo 48. Del procedimiento para la liquidación. Para la liquidación se procederá así: quince (15) días después de la publicación del último aviso se liquidará la entidad, pagando las obligaciones contraídas con terceros y observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.

Artículo 49. De los deberes del liquidador. Serán deberes del liquidador:

1. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución.
2. Formar el inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, de los libros, documentos y papeles.
3. Exigir cuenta de su gestión a los administradores anteriores, o a cualquiera otra persona que haya manejado intereses de la asociación, siempre que tales cuentas no hayan sido aprobadas de conformidad con la ley, los estatutos y los reglamentos.
4. Cobrar los créditos activos de la asociación, utilizando la vía judicial si fuere necesario.

5. Obtener la restitución de los bienes sociales que se hallen en poder de asociados o de terceros a medida que se vaya haciendo exigible su entrega, lo mismo que restituir bienes de los cuales la asociación no sea propietaria.

6. Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten.

7. Rendir cuentas periódicas durante su mandato y al final de la liquidación y obtener del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, su aprobación.

Artículo 50. De la prioridad de pagos. En la liquidación de las asociaciones agropecuarias o campesinas deberá procederse al pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:

1. Gastos de la liquidación.
2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y causados al momento de la disolución.
3. Obligaciones fiscales.
4. Créditos hipotecarios y prendarios.
5. Obligaciones con terceros.
6. Obligaciones con los asociados.

Artículo 51. De los remanentes de la liquidación. Los remanentes de la liquidación serán transferidos a la entidad sin ánimo de lucro o de beneficio común que los estatutos hayan previsto o la acordada en la asamblea de disolución, y a falta de disposición estatutaria, a la asociación de esta naturaleza, que autorice el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso.

CAPITULO X

De las asociaciones de segundo y tercer grado

Artículo 52. De las condiciones y requisitos. Las asociaciones agropecuarias y campesinas podrán agruparse entre sí, o con otras asociaciones sin ánimo de lucro, en asociaciones de segundo grado, siempre que con ello se busque facilitar el cumplimiento de sus fines económicos y sociales, que todas ellas tengan un mismo o similar objeto social y que participen en su integración cuando menos diez (10) asociaciones.

El objeto social de los organismos de segundo grado estará orientado exclusivamente a servir en las necesidades de sus asociaciones integrantes.

Parágrafo. Las asociaciones de segundo grado podrán agruparse en asociaciones de tercer grado, siempre que con ello se busque facilitar el cumplimiento de sus fines económicos y sociales, que todas ellas tengan un mismo o similar objeto social y que para su constitución participen por lo menos cinco (5) asociaciones de segundo grado.

Artículo 53. **Del reconocimiento.** Para el reconocimiento, funcionamiento y control y vigilancia de la asociaciones de segundo y tercer grado se exigirán y aplicarán las mismas disposiciones señaladas para las asociaciones de primer grado.

CAPITULO XI

Disposiciones finales

Artículo 54. **De la aplicación analógica.** Los casos no previstos en el presente decreto se resolverán mediante la aplicación analógica de disposiciones generales sobre asociaciones, corporaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables a las asociaciones agropecuarias y campesinas.

Artículo 55. **De la adecuación de estatutos.** En un plazo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la vigencia de este decreto, las asociaciones agropecuarias y campesinas, constituidas con anterioridad a éste, deberán adaptar sus estatutos a las disposiciones contenidas en el mismo. Sin embargo, los estatutos de las mismas continuarán vigentes hasta la fecha de aprobación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, de las reformas estatutarias presentadas para el efecto dentro del plazo establecido.

Artículo 56. **De la inactividad.** Las asociaciones agropecuarias y campesinas, que a la fecha del presente decreto se encuentren inactivas deberán reestructurar sus cuadros directivos, para lo cual tendrán un plazo de seis (6) meses. Vencido este término el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, procederá a cancelar la personería jurídica.

Se entiende que una asociación agropecuaria o campesina se encuentra en estado de inactividad, cuando no reporta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, informes en un período de más de dos años.

Artículo 57. **De la vigencia.** El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 1994.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Antonio Hernández Gamarra.

Retención en la fuente

DECRETO NUMERO 2719 DE 1994
(diciembre 14)

por el cual se ajusta la tabla de Retención en la Fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las establecidas en los artículos 383, 387 y 868 del Estatuto Tributario,

DECRETA:

Artículo 1o. A partir del 1o. de enero de 1995, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, contenida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:

TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE 1995

Intervalos	% de retención	Valor a retener
1 a 590.000		0
590.001 a 600.000	0.14	850
600.001 a 610.000	0.42	2.550
610.001 a 620.000	0.69	4.250
620.001 a 630.000	0.95	5.950
630.001 a 640.000	1.20	7.650
640.001 a 650.000	1.45	9.350
650.001 a 660.000	1.69	11.050

Intervalos		% de retención	Valor a retener	Intervalos		% de retención	Valor a retener
660.001	a 670.000	1.92	12.750	2.050.001	a 2.100.000	16.48	342.050
670.001	a 680.000	2.14	14.450	2.100.001	a 2.150.000	16.68	354.550
680.001	a 690.000	2.36	16.150	2.150.001	a 2.200.000	16.88	367.050
690.001	a 700.000	2.57	17.850	2.200.001	a 2.250.000	17.06	379.550
700.001	a 710.000	2.77	19.550	2.250.001	a 2.300.000	17.23	392.050
710.001	a 720.000	2.97	21.250	2.300.001	a 2.350.000	17.51	407.050
720.001	a 730.000	3.17	22.950	2.350.001	a 2.400.000	17.77	422.050
730.001	a 740.000	3.35	24.650	2.400.001	a 2.450.000	18.02	437.050
740.001	a 750.000	3.54	26.350	2.450.001	a 2.500.000	18.26	452.050
750.001	a 760.000	3.72	28.050	2.500.001	a 2.550.000	18.50	467.050
760.001	a 770.000	3.89	29.750	2.550.001	a 2.600.000	18.72	482.050
770.001	a 780.000	4.06	31.450	2.600.001	a 2.650.000	18.94	497.050
780.001	a 790.000	4.22	33.150	2.650.001	a 2.700.000	19.14	512.050
790.001	a 800.000	4.38	34.850	2.700.001	a 2.750.000	19.34	527.050
800.001	a 810.000	4.54	36.550	2.750.001	a 2.800.000	19.53	542.050
810.001	a 820.000	4.69	38.250	2.800.001	en adelante		542.050
820.001	a 830.000	4.84	39.950	Más el 30% del exceso sobre \$ 2.800.000			
830.001	a 840.000	4.99	41.650				
840.001	a 850.000	5.13	43.350				
850.001	a 860.000	5.27	45.050				
860.001	a 870.000	5.40	46.750				
870.001	a 880.000	5.54	48.450				
880.001	a 890.000	5.67	50.150				
890.001	a 900.000	5.79	51.850				
900.001	a 910.000	5.92	53.550				
910.001	a 920.000	6.04	55.250				
920.001	a 930.000	6.16	56.950				
930.001	a 940.000	6.27	58.650				
940.001	a 950.000	6.39	60.350				
950.001	a 960.000	6.50	62.050				
960.001	a 970.000	6.69	64.550				
970.001	a 980.000	6.88	67.050				
980.001	a 990.000	7.06	69.550				
990.001	a 1.000.000	7.24	72.050				
1.000.001	a 1.050.000	7.76	79.550				
1.050.001	a 1.100.000	8.56	92.050				
1.100.001	a 1.150.000	9.29	104.550				
1.150.001	a 1.200.000	9.96	117.050				
1.200.001	a 1.250.000	10.58	129.550				
1.250.001	a 1.300.000	11.14	142.050				
1.300.001	a 1.350.000	11.66	154.550				
1.350.001	a 1.400.000	12.15	167.050				
1.400.001	a 1.450.000	12.60	179.550				
1.450.001	a 1.500.000	13.02	192.050				
1.500.001	a 1.550.000	13.41	204.550				
1.550.001	a 1.600.000	13.78	217.050				
1.600.001	a 1.650.000	14.13	229.550				
1.650.001	a 1.700.000	14.45	242.050				
1.700.001	a 1.750.000	14.76	254.550				
1.750.001	a 1.800.000	15.05	267.050				
1.800.001	a 1.850.000	15.32	279.550				
1.850.001	a 1.900.000	15.58	292.050				
1.900.001	a 1.950.000	15.82	304.550				
1.950.001	a 2.000.000	16.05	317.050				
2.000.001	a 2.050.000	16.27	329.550				

Artículo 2o. Los asalariados cuyos ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, en el año inmediatamente anterior, hayan sido inferiores a veintitres millones trescientos mil pesos (\$ 23.300.000), podrán optar por disminuir la base mensual de retención en la fuente, con el valor efectivamente pagado por el trabajador en el año inmediatamente anterior por concepto de intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda o con los pagos efectuados en dicho año por concepto de salud y educación del trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos, de que trata el artículo 387 del Estatuto Tributario. Lo anterior con sujeción a los límites establecidos en los artículos siguientes.

Artículo 3o. Cuando el trabajador tenga derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria, en virtud de préstamo para adquisición de vivienda, el valor máximo que se podrá restar mensualmente de la base de retención será de quinientos cuarenta mil pesos (\$ 540.000), de conformidad con el artículo 387 del Estatuto Tributario.

Artículo 4o. Cuando el asalariado obtenga ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria que en el año inmediatamente anterior hayan sido inferiores al tope establecido en el artículo 2o. y opte por la disminución por pagos de salud y educación, deberá cumplir las siguientes condiciones:

1. El asalariado deberá formular una solicitud escrita al agente retenedor, acompañando copia o fotocopia autenticada del certificado expedido por las entidades a las cuales se efectuaron los pagos, en el que consten, además del nombre o razón social y NIT de la entidad, el monto total de los pagos, concepto, período a que corresponden y el

nombre y NIT de los beneficiarios de los respectivos servicios. Estos documentos deberán conservarse para ser presentados cuando las autoridades tributarias así lo exijan.

2. Cuando se trate del procedimiento número uno, el valor a disminuir mensualmente será el resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce o por el número de meses a que correspondan, sin que en ningún caso pueda exceder del quince por ciento (15%) del total de los ingresos gravados provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes.

3. Cuando se trate del procedimiento número dos, la base de retención mensual, se disminuirá proporcionalmente con el resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce (12), o por el número de meses a que correspondan, sin que en ningún caso pueda exceder del quince por ciento (15%) del promedio de los ingresos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, determinado de conformidad con el inciso tercero del artículo 386 del Estatuto Tributario.

El porcentaje fijo de retención establecido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 386 del Estatuto Tributario, se aplicará a la base mensual de retención establecida en la forma indicada en este numeral.

4. Los establecimientos educativos debidamente reconocidos por el ICFES o por la autoridad oficial correspondiente, las empresas de medicina prepagada vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud y las Compañías de Seguros vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán suministrar dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud presentada por el asalariado, la certificación respectiva. La no expedición de dicha certificación o su expedición extemporánea generará la sanción contemplada en el artículo 667 del Estatuto Tributario.

Artículo 5o. De conformidad con el artículo 387 del Estatuto Tributario, los asalariados sólo podrán solicitar como disminución de la base de retención uno de los conceptos allí previstos.

Artículo 6o. El presente decreto rige desde el primero (1o.) de enero de 1995.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 1994.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Guillermo Perry Rubio.

Salario mínimo legal diario

DECRETO NUMERO 2872 DE 1994
(diciembre 28)

por el cual se señala el salario mínimo legal.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de la Ley 50 de 1990,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 54 de 1987, el Consejo Nacional Laboral es un organismo asesor permanente del Gobierno Nacional en materias laborales y de seguridad social.

Que de conformidad con el artículo 19 de la Ley 50 de 1990, corresponde al Consejo Nacional Laboral la fijación por consenso de los salarios mínimos legales de carácter general para el sector privado.

Que por medio de Acuerdo Número 001 de diciembre de 1994, el Consejo Nacional Laboral, fijó en la suma de tres mil novecientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta y cinco centavos moneda corriente (\$ 3.964,45) el nuevo tope salarial de remuneración mínima para los sectores urbano y rural.

Que es indispensable expedir un decreto recogiendo el Acuerdo a que llegó el Consejo Nacional Laboral sobre el salario mínimo legal diario,

DECRETA:

Artículo 1o. A partir del primero (1o.) de enero de 1995 regirá como salario mínimo legal diario, para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de tres mil novecientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta y cinco centavos moneda corriente (\$ 3.964,45).

Artículo 2o. Este decreto rige a partir del primero (1o.) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995) y deroga el Decreto 2548 de 1993.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Cartagena de Indias, a 28 de diciembre de 1994.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Guillermo Perry Rubio.

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
María Sol Navia Velasco.

Auxilio patronal de transporte

DECRETO NUMERO 2873 DE 1994
(diciembre 28)

por el cual se establece el auxilio patronal de transporte.

El **Presidente de la República de Colombia,**

en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 15 de 1959,

DECRETA:

Artículo 1o. Fijar a partir del primero (1o.) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995) el Auxilio Patronal

de Transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devengan un salario mensual básico hasta de dos (2) veces el salario mínimo legal, en la suma de DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS (\$ 10.815,00) moneda corriente, mensuales.

Artículo 2o. El presente decreto rige a partir del primero (1o.) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Publíquese y cúmplase.

Dado en Cartagena de Indias, a 28 de diciembre de 1994.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Guillermo Perry Rubio.

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
María Sol Navia Velasco.

El Ministro del Transporte,
Juan Gómez Martínez.

RESOLUCIONES

Bonos o títulos de deuda pública externa

RESOLUCION EXTERNA No. 35 DE 1994
(diciembre 2)

por la cual se señalan las condiciones financieras a las cuales deberá sujetarse la Nación para colocar bonos o títulos de deuda pública externa en los mercados capitales internacionales.

La Junta Directiva del Banco de la Republica,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las que le confieren los literales c) y h) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992,

RESUELVE:

Artículo 1o. Sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos por las normas vigentes y con el fin de asegurar que la colocación se efectúe en condiciones de mercado, los títulos en moneda extranjera que emita y coloque la Nación en los mercados de capitales internacionales diferentes de los contemplados en las Resoluciones Externas Nos. 38 de 1993 y 17 de 1994, se sujetarán a las siguientes condiciones financieras:

Monto: Hasta US\$ 150 millones o su equivalente en otras monedas.

Plazo Superior a sesenta meses contados a parte de amortización: tir de la fecha de cierre de la emisión.

Interés:	Tasa fija o variable.
Precio:	A la par, con prima o descuento.
Rendimiento efectivo máximo:	Se fijará de acuerdo con las condiciones de mercado prevaletientes a la fecha de lanzamiento de la emisión, sin que su tasa equivalente en dólares americanos exceda en 160 puntos básicos a la tasa que resulte del Título de Tesorería de los Estados Unidos de América del mismo plazo.

Artículo 2o. El Director General de Crédito Público deberá informar al Banco de la República sobre el resultado de la colocación de los títulos a que se refiere esta resolución.

Artículo 3o. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación.

Regulaciones en materia cambiaria

RESOLUCION EXTERNA No. 36 DE 1994
(diciembre 6)

por la cual se expiden regulaciones en materia cambiaria.

La Junta Directiva del Banco de la República,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 16 literal h) y 59 de la Ley 31 de 1992,

RESUELVE:

Artículo 1o. El numeral 4o. del párrafo del artículo 29 de la Resolución Externa No. 21 de 1993 quedará así:

"4. Cuando se trate de créditos en moneda extranjera contratados a partir de la fecha de vigencia de la Resolución Externa No. 36 de 1994 para financiar exportaciones de café verde con plazo no superior a sesenta (60) días calendario, por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia hasta por un monto total de cien millones de dólares (US\$ 100.000.000) o su equivalente en otras monedas, y de igual suma en el caso de exportadores privados de café, previa comprobación de la condición de exportador de café ante el intermediario del mercado

cambiario a través del cual se negocien las divisas, y previa verificación con el Banco de la República que no se excedan estos límites. Sin embargo, si la Federación Nacional de Cafeteros no ha utilizado la totalidad del cupo antes mencionado, los exportadores privados de café podrán hacer uso del mismo hasta por cincuenta millones de dólares (US\$ 50.000.000) o su equivalente en otras monedas.

"Obtenida la financiación en moneda extranjera las exportaciones de café deberán efectuarse dentro del término de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de venta de las divisas a los intermediarios del mercado cambiario.

"El capital de los préstamos en moneda extranjera a que se refiere este numeral será cubierto directamente con el producto de la exportación y únicamente deberán adquirirse a través del mercado cambiario las divisas necesarias para atender el pago de los intereses de los préstamos".

Artículo 2o. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación.

Encaje de los establecimientos de crédito

RESOLUCION EXTERNA No. 37 DE 1994
(diciembre 9)

por la cual se expiden regulaciones en materia de encaje de los establecimientos de crédito

La Junta Directiva del Banco de la República,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de lo previsto en el artículo 16 literal a) de la Ley 31 de 1992,

RESUELVE:

Artículo 1o. El artículo 4o. de la Resolución Externa No. 14 de 1994 quedará así:

"Artículo 4o. **Porcentajes de encaje de las corporaciones de ahorro y vivienda.** Señálanse los siguientes porcentajes que deberán utilizar las corporaciones de ahorro y vivienda para calcular el monto del encaje requerido conforme al sistema establecido en la presente resolución.

Denominación (exigibilidades en moneda legal)	Cuentas PUC computables	%
1. Cuentas de ahorro de valor constante	Código 2125	10
2. Depósitos en "Certificados de Ahorro de Valor Constante" emitidos con plazo inferior a seis (6) meses	Código 213007	3
3. Depósitos en "Certificados de Ahorro de Valor Constante" emitidos con plazo igual o superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año.	Código 213010	2
4. Depósitos en "Certificados de Ahorro de Valor Constante" emitidos con plazo igual o superior a un (1) año.	Códigos 213015 y 213020	1
5. Venta de cartera.	Código 2215	3
6. Depósitos ordinarios.	Código 212005	10
7. Exigibilidades correspondientes a aceptaciones bancarias vencidas.	Código 2310	41

"Parágrafo. Las corporaciones de ahorro y vivienda que capten recursos no estipulados en unidades de poder adquisitivo constante, mediante depósitos de ahorro a la vista o a término, o a través de certificados de depósito a término, autorizados en el artículo 4o. del Decreto 915 de 1993 y el artículo 1o. del Decreto 2423 de 1993, deberán sujetarse al régimen de encaje señalado para este mismo tipo de captaciones de los bancos comerciales.

"La captación de recursos a través de la prestación de servicios bancarios de recaudo por parte de las corporaciones de ahorro y vivienda también quedará sujeta al régimen de encaje señalado para las captaciones realizadas por ese mismo concepto por los bancos comerciales.

"Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable a la sección de ahorro y vivienda del Banco Central Hipotecario".

Artículo 2o. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación y surte efectos desde el 14 de diciembre de 1994.

Regulaciones en materia cambiaria

RESOLUCION EXTERNA No. 38 DE 1994
(diciembre 22)

por la cual se expiden regulaciones en materia cambiaria.

La Junta Directiva del Banco de la República,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 16 literal h) de la Ley 31 de 1992

RESUELVE:

Artículo 1o. El artículo 17 de la Resolución Externa No. 21 de 1993 quedará así:

"Artículo 17. **Canalización.** Los residentes en el país deberán canalizar a través del mercado cambiario las divisas provenientes de sus exportaciones, y podrán conceder plazo para la cancelación de las mismas a compradores del exterior.

"Cuando el plazo otorgado al comprador del exterior sea superior a doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la Declaración de Exportación, la exportación constituye una operación de endeudamiento externo. El correspondiente crédito deberá registrarse dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de la Declaración de Exportación, con sujeción a las disposiciones contenidas en el Capítulo III de este título, cuando su monto supere la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000), o su equivalente en otras monedas.

"También deberá cumplirse con el requisito señalado en el inciso anterior, cuando el plazo para el pago de la exportación pueda resultar superior a doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la Declaración de Exportación, como consecuencia de procesos ante autoridades judiciales, arbitrales o administrativas, cuando el importador del exterior controvierta el pago directamente ante el proveedor, o en los casos en que las prórrogas concedidas por el exportador superen dicho plazo.

"Parágrafo. No se exigirá la constitución del depósito de que trata el artículo 30 de esta resolución para el registro de estas financiaciones".

Artículo 2o. El artículo 27 de la Resolución Externa No. 21 de 1993 quedará así:

"Artículo 27. **Canalización.** Los ingresos y egresos de divisas por concepto de créditos en moneda extranjera obtenidos u otorgados por residentes en el país deberán canalizarse a través del mercado cambiario.

"Parágrafo. Las declaraciones de cambio respectivas deberán indicar el número de registro del crédito, nombre del acreedor y deudor, monto vigente de la deuda y demás condiciones del crédito.

"El declarante deberá presentar al intermediario del mercado cambiario con el cual efectúe la operación, copia del documento de registro del crédito ante el Banco de la República a que se refiere la Declaración de Cambio. Dicho intermediario verificará que el número del registro del crédito, los nombres de acreedor y deudor, así como la identificación del declarante consignados en la Declaración de Cambio, correspondan fielmente a las consignadas en el documento de registro ante el Banco de la República".

Artículo 3o. El artículo 69 de la Resolución Externa No. 21 de 1993 quedará así:

Artículo 69. **Obligaciones.** Las entidades de que trata el artículo anterior estarán obligadas a:

"1o. Exigir la presentación de la Declaración de Cambio por cada operación que efectúen y verificar que la identificación del declarante corresponda con la consignada en la Declaración de Cambio. Cuando haya lugar a ello, deberán exigir los documentos que señale el régimen cambiario. Para aquellas operaciones en que el régimen cambiario exige el registro ante el Banco de la República como condición previa para la canalización de las divisas a través del mercado cambiario, deberán verificar que el número de registro asignado por el Banco de la República esté fielmente consignado en la Declaración de Cambio;

"2o. Suministrar información al Banco de la República sobre las operaciones de cambio que hayan realizado, en la forma y términos que determine dicha entidad;

"3o. Informar diariamente a la Superintendencia Bancaria, en los términos que ésta señale, sobre las tasas de cambio a las cuales efectúen sus operaciones de compra y venta de divisas o de títulos representativos de las mismas;

"4o. Informar trimestralmente a la Superintendencia Bancaria sobre el movimiento de sus cuentas corrientes en el exterior;

"5o. Informar trimestralmente a la Superintendencia Bancaria y al Banco de la República sobre la constitución y movimiento de las cuentas en moneda extranjera por parte de las personas naturales y jurídicas no residentes en el país.

"Parágrafo. De conformidad con lo previsto en la Ley 9a. de 1991 y en los Decretos 2116 de 1992 y 663 de 1993, el incumplimiento total o parcial de estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones por parte de la Superintendencia Bancaria tanto a la entidad como a los funcionarios responsables que desacaten estas disposiciones".

Artículo 4o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Apoyos transitorios de liquidez del Banco de la República

RESOLUCION EXTERNA No. 39 DE 1994
(diciembre 22)

por la cual se dictan normas sobre apoyos transitorios de liquidez del Banco de la República a los establecimientos de crédito.

La Junta Directiva del Banco de la República,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial de las conferidas por los artículos 12, literal a) de la Ley 31 de 1992 y 68 del Decreto 2520 de 1993.

RESUELVE:

Artículo 1o. El artículo 2o. de la Resolución Externa No. 16 de 1994 quedará así:

"Artículo 2o. **Modalidades de utilización.** Los cupos de liquidez se utilizarán por los establecimientos de crédito a través del redescuento de obligaciones admisibles o mediante la venta con pacto de recompra de inversiones autorizadas.

"Se consideran obligaciones admisibles las que consten en pagarés, letras de cambio u otros títulos valores legalmente endosables a la orden del Banco de la República. Estas obligaciones serán redescontables hasta por el valor que señale el Banco de la República, de acuerdo con las características de cada obligación de manera que, a su juicio, la operación goce de seguridades suficientes.

"Se consideran inversiones autorizadas los títulos emitidos o garantizados por el Banco de la República, las cédulas hipotecarias de inversión y los certificados de depósito a término emitidos por establecimientos de crédito con acceso a recursos de créditos externos administrados por el Banco de la República, siempre que en este último caso el monto de los mismos no exceda el límite asignado a la entidad emisora para la utilización de tales recursos. El Banco de la República fijará el valor de descuento de los títulos que adquiera".

"Parágrafo 1o. Recibida la solicitud por el Banco de la República, éste efectuará el redescuento o la compra de inversiones en forma automática, sin perjuicio de la posterior verificación de la adecuada destinación del crédito y del cumplimiento de las demás condiciones previstas en esta resolución.

"En caso de que se establezca cualquier incumplimiento se cancelará el cupo.

"Los títulos emitidos por el Banco de la República que tengan vigente el plazo de vencimiento y que éste adquiera transitoriamente en desarrollo de las operaciones previstas en el presente título no se considerarán de plazo vencido.

"Parágrafo 2o. La utilización de los cupos de liquidez por parte de los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero se formalizará únicamente a través de las ventas que efectúen con pacto de recompra de las inversiones de que trata este artículo.

"Parágrafo 3o. La utilización de los cupos de liquidez por parte de las compañías de financiamiento comercial se realizará a través de las ventas que efectúen con pacto de recompra de las inversiones de que trata este artículo, o mediante el redescuento de obligaciones admisibles a través de bancos que celebren operaciones crediticias con dichas entidades, para suministrarles liquidez.

"El margen de redescuento de estas operaciones será del 100% y la tasa de interés será la que periódicamente determine la Junta Directiva.

"El Banco intermediario deberá exigir a la compañía de financiamiento comercial la aprobación por parte del Banco de la República del cupo solicitado. El Banco de la República señalará los requisitos para el otorgamiento de estos cupos de liquidez.

Artículo 2o. El literal a) del artículo 8o. de la Resolución Externa No. 16 de 1994 quedará así:

"a) Depósitos en cuenta corriente, certificados de depósito a término, depósitos de ahorro comunes y certificados de depósito de ahorro a término, en el caso de los establecimientos bancarios, incluidas las cédulas hipotecarias de inversión para los bancos hipotecarios";

Artículo 3o. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación y surte efectos a partir del primero (1o.) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Encaje de los establecimientos de crédito

RESOLUCION EXTERNA No. 40 DE 1994
(diciembre 22)

por la cual se expiden regulaciones relacionadas con el encaje de los establecimientos de crédito y se dictan otras disposiciones.

La Junta Directiva del Banco de la Republica,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 16 literal a) de la Ley 31 de 1992

RESUELVE:

Artículo 1o. El artículo 2o. de la Resolución Externa No. 14 de 1994 quedará así:

"Artículo 2o. **Porcentajes de encaje de los bancos hipotecarios.** Señáanse los siguientes porcentajes que deberán utilizar los bancos hipotecarios para calcular el monto del encaje requerido en moneda legal conforme al sistema establecido en la presente resolución:

Denominación (exigibilidades en moneda legal)	Cuentas PUC computables	%
1. Depósitos y exigibilidades	Grupo 21, excepto los códigos 216010 y 216530; Grupo 22, excepto los códigos 2205, 2210 y 221523.	

Denominación (exigibilidades en moneda legal)	Cuentas PUC computables	%
	Grupo 25, excepto los códigos 2505, 2510, 2515, 2520, 2525, 2540, 2545, 2550, 2555 y 2565. Grupo 27, excepto los códigos 2704, 2710, 2715, 2720, 2730, 2735, 2740, 2745, 2747, 2750, 2755, 2765, 279505, 279510, 279515 y 2797.	41
2. Cédulas hipotecarias de inversión con plazo inferior a seis (6) meses.	Código 261010	3
3. Cédulas hipotecarias de inversión con plazo igual o superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año.	Código 261010	2
4. Cédulas hipotecarias de inversión con plazo igual o superior a un (1) año	Código 261010	1

"El encaje sobre cédulas hipotecarias de inversión no se aplicará para las nuevas cédulas hipotecarias emitidas por el Banco Central Hipotecario de que trata el numeral 1o. del artículo 6o. de la presente Resolución.

"Parágrafo. En el evento en que el Banco Central Hipotecario, en desarrollo de la autorización impartida por el Decreto 2822 de 1991, realice captaciones o mantenga exigibilidades propias de los bancos comerciales, deberá sujetarse al régimen de encaje establecido para esta clase de instituciones financieras".

Artículo 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos a partir de la segunda bisemana del mes de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995).

INDICE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS Y EJECUTIVAS

LEYES

- 165 Noviembre 9**
Diario Oficial 41.589, noviembre 9 de 1994
- Aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.
- 166 Noviembre 25**
Diario Oficial 41.615, noviembre 28 de 1994
- I. Dicta medidas relacionadas con las apropiaciones presupuestales para las personerías y contralorías distritales y municipales. II. Deroga el artículo 202 de la Ley 136 de 1994 y el Decreto 1678 del mismo año.

- 168 Noviembre 29**
Diario Oficial 41.619, noviembre 30 de 1995
- Fija el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1995.

DECRETOS

- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- 2557 Noviembre 18**
Diario Oficial 41.606, noviembre 21 de 1994
- Crea los Comités de Seguimiento de los Planes de Acción para los Departamentos.

MINISTERIO DE GOBIERNO

2594 Noviembre 24

Diario Oficial 41.613, noviembre 25 de 1994

Dispone cómo estará integrada la Comisión Asesora del Gobierno Nacional para la compilación de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, para la organización y funcionamiento de los municipios.

2626 Noviembre 29

Diario Oficial 41.618, noviembre 30 de 1994

Expide la compilación de las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y el funcionamiento de los municipios.

2629 Noviembre 29

Diario Oficial 41.618, noviembre 30 de 1994

Crea el Fondo de Participación Ciudadana como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Gobierno.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

2531 Noviembre 16

Diario Oficial 41.600, noviembre 16 de 1994

Introduce modificaciones al Régimen de Aduanas.

2532 Noviembre 16

Diario Oficial 41.600, noviembre 16 de 1994

Fija los mecanismos para ejercer la actividad de Intermediación Aduanera.

2533 Noviembre 16

Diario Oficial 41.600, noviembre 16 de 1994

I. Autoriza a las corporaciones de ahorro y vivienda para otorgar préstamos de inversión garantizados con hipoteca sobre vivienda o inmuebles diferentes de vivienda. II. Dispone que las corporaciones de ahorro y vivienda podrán conceder créditos hipotecarios denominados en moneda legal entendiéndose por los mismos aquellos que pueden estipularse en —UPAC—. III. Fija límites al valor total de los créditos denominados en moneda legal que concedan las corporaciones de ahorro y vivienda. IV. Limita al 150% del valor de sus captaciones denominadas en

UPAC, las operaciones activas de crédito estipuladas en UPAC que efectúen las corporaciones de ahorro y vivienda. V. Faculta a las corporaciones de ahorro y vivienda para otorgar financiación mediante la aceptación de letras de cambio que se originen en transacciones de bienes correspondientes a compraventas nacionales o internacionales con sujeción a las normas cambiarias vigentes. VI. Deroga el Parágrafo 2 del artículo 10 y el artículo 14 de la Resolución 19 de 1991, los artículos 1 y 2 de la Resolución 5 de 1992, disposiciones expedidas por la Junta Directiva del Banco de la República y los artículos 1 y 3 del Decreto 915 de 1993.

2524 Noviembre 11

Diario Oficial 41.594, noviembre 11 de 1994

I. Crea un sistema compensatorio con el fin de garantizar la adecuada protección de la producción nacional, para los productos agrícolas que se clasifiquen en las partidas arancelarias señaladas en este Decreto. II. Dispone que el sistema compensatorio a que se refiere el punto anterior se aplicará mediante un Descuento Arancelario Específico Equivalente —DAEE—, el cual se calculará con sujeción a lo establecido en la presente norma.

2539 Noviembre 17

Diario Oficial 41.603, noviembre 18 de 1994

Dicta medidas en materia de retención en la fuente, así: 1. Tarifas de retención en la fuente por ingresos provenientes del exterior para contribuyentes declarantes y no declarantes. 2. Mecanismos de declaración, pago y control de la retención por ingresos obtenidos en el exterior.

2633 Noviembre 29

Diario Oficial 41.620, noviembre 30 de 1994

Dicta medidas reglamentarias de la Ley 100 de 1993 por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, así: 1. Régimen aplicable para el cobro de los créditos por jurisdicciones coactiva y ordinaria. 2. Control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria respecto de los administradores del régimen solidario de prima media con prestación definida. 3. Funciones de la Superintendencia Bancaria sobre las administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

2439 Noviembre 2

Diario Oficial 41.582, noviembre 3 de 1994

Señala mecanismos de control aplicables a las importaciones de algunos productos agropecuarios.

2621 Noviembre 29

Diario Oficial 41.620, noviembre 30 de 1994

Dicta medidas reglamentarias de la Ley 101 de 1993, por la cual se expidieron normas sobre desarrollo agropecuario y pesquero, relativas a la cofinanciación de programas de desarrollo rural con el fondo D.R.I.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

2644 Noviembre 29

Diario Oficial 41.620, noviembre 30 de 1994

Fija la tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% con la prestación económica correspondiente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

2491 Noviembre 8

Diario Oficial 41.593, noviembre 11 de 1994

Reglamenta el régimen de transición de cobertura para la prestación del servicio público de seguridad social en salud, a que se refiere el artículo 25 del Decreto Ley 1298 de 1994.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

2636 Noviembre 29

Diario Oficial 41.620, noviembre 30 de 1994

Adopta definiciones para efectos de la reglamentación de la Ley 141 de 1994, por la cual se creó el Fondo Nacional de Regalías y la Comisión Nacional de Regalías.

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

2440 Noviembre 2

Diario Oficial 41.582, noviembre 3 de 1994

Determina que cuando se trate de exportaciones de bienes de capital, financiadas con créditos a más de un año, el Banco de la República podrá pagar el CERT previo el cumplimiento de los requisitos señalados en este decreto.

2487 Noviembre 8

Diario Oficial 41.590, noviembre 10 de 1994

Fija niveles porcentuales del Certificado de Reembolso Tributario—CERT—, aplicables a las exportaciones del producto cuya subpartida arancelaria se relaciona en el presente decreto.

2590 Noviembre 24

Diario Oficial 41.613, noviembre 25 de 1994

Introduce modificaciones en el Arancel de Aduanas.

RESOLUCION EJECUTIVA

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

157 Noviembre 29

Diario Oficial 41.620, noviembre 30 de 1994

I. Autoriza al Municipio de Medellín para emitir Bonos de Deuda Pública Interna hasta por la suma de \$ 20.000.000.000. II. Fija las características financieras de los bonos a que se refiere el punto anterior.

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

00744 Noviembre 15

Diario Oficial 41.621, diciembre 1o. de 1994

Señala directrices y fija pautas para la administración de los recursos del Fondo de Fomento Agropecuario.

00756 Noviembre 17

Diario Oficial 41.607, noviembre 21 de 1994

Expide la reglamentación para el otorgamiento de los vistos buenos para la importación de algunos productos agropecuarios.

00757 Noviembre 17

Diario Oficial 41.607, noviembre 21 de 1994

Determina el valor por tonelada del Descuento Arancelario Específico Equivalente, DAEE, la relación que debe existir entre la producción absorbida y las importaciones con derecho a DAEE y el contingente de importaciones con derecho al mismo descuento.

DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES

5342 Noviembre 28

Diario Oficial 41.621, diciembre 1o. de 1994

Aclara el procedimiento para las retenciones en la fuente por ingresos provenientes del exterior.

RESOLUCIONES EXTERNAS

BANCO DE LA REPUBLICA

33 Noviembre 4

Determina que se podrá efectuar sin la constitución del depósito en moneda legal en el Banco de la República a que se refiere el artículo 30 de la Resolución 21 de 1993, la amortización anticipada parcial o total de los préstamos externos y de los préstamos en moneda extranjera otorgados por los intermediarios del mercado cambiario. Requisitos.

34 Noviembre 11

Introduce modificaciones al artículo 25 de la Resolución Externa No. 21 de 1993, en el sentido de determinar cuál será el precio mínimo de reintegro por concepto de exportaciones de café verde.